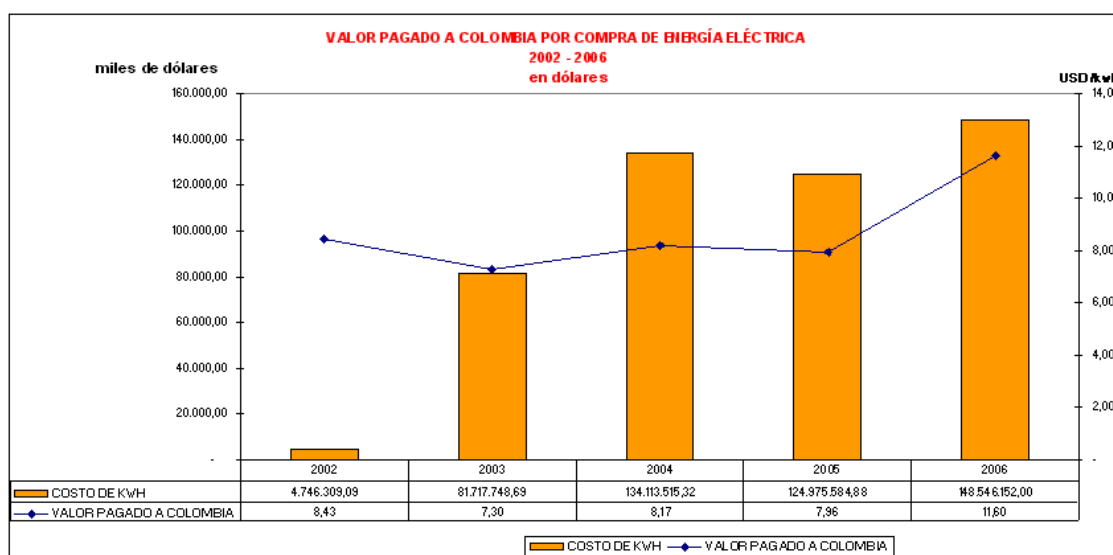


COCA-CODO-SINCLAIR:

Sólo la veeduría ciudadana garantizará la transparencia del contrato.

Desde el 1992, la economía ecuatoriana se ha visto constantemente amenazada por la incapacidad de contar con la provisión de una energía suficiente que responda a su demanda y a precios competitivos. Todo ello se refleja en nuestra relación con Colombia. Según las cifras reportadas por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), desde el 2002 al 2007, los ecuatorianos hemos entregado casi USD 500 millones a Colombia por compra de energía a un costo promedio anual de 8,69 centavos de dólar por cada kilovatio hora (*gráfico*); mientras en ese mismo período, la venta de energía a Colombia totalizaron aproximadamente USD 8 millones a un costo anual promedio de 4 centavos de dólar por kilovatio hora, producto de una mala negociación de los funcionarios que lo hicieron. Una diferencia abismal si lo vemos desde la perspectiva del precio unitario, a pesar que por disposiciones de Acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (las dos naciones pertenecen), Colombia debía y debe cobrar un precio unitario menor.



La principal afectada por esta situación de seguridad en la provisión confiable de energía eléctrica fue la ciudad de Guayaquil. La mayor parte de esa electricidad comprada a Colombia era en el mercado spot (mercado de oportunidad) y en su mayor parte era despachada hacia la CATEG. Por lo cual, a más de los problemas políticos y judiciales, la obligaban los centralistas funcionarios de del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) comprarla, la estrangulaban financieramente más de lo que estaba.

La prioridad del proyecto

Por lo tanto es vital, que el Ecuador se zafe de esta incómoda dependencia colombiana, que traía como corolario, una afección grave a nuestra competitividad, por cuanto uno de los rubros más importantes de la producción tiene un alto costo. Con el valor pagado a Colombia desde el 2002 al 2007, se pudo construir dos centrales hidroeléctricas de 250 megavatios cada una. Pero esto no se dio por la ineficiencia de los gobiernos de turno en crear condiciones para que la inversión extranjera, revestida de una justa seguridad jurídica, venga a nuestro país. La dependencia con Colombia seguirá por lo menos durante el 2008; se prevé la entrada en operación de la segunda interconexión en este año, siempre y cuando, las tensas relaciones entre los dos países no influyan en este tema. Por lo pronto, la energía eléctrica que nos vende Colombia representa el 10 por ciento del total de energía que se consume en el país y en tiempos de estiaje, esta participación aumenta.

La entrada en operación de Mazar prevista para el próximo año reducirá esa dependencia y la del proyectado Coca-Codo-Sinclair, lo hará aún más. En total tendremos 2.400 megavatios de nueva generación para el 2014. Pero a diferencia de Mazar, Coca-Codo-Sinclair, presenta singularidades que el actual Gobierno tiene que explicar para el bien de todo el sector eléctrico nacional, tanto presente como futuro.

Está claro que es una urgencia nacional, que como política de Estado se debe perseguir ser autosuficiente en la generación de energía eléctrica. En eso no habrá un ecuatoriano/a que piense lo contrario. Esto implica un concepto de soberanía que va más allá de que la presencia efectiva del mandato del Estado se sienta en cada metro cuadrado de nuestro territorio. La soberanía también tiene que ver en que los habitantes de este país vean que sus Gobiernos (centrales y seccionales) también sean soberanos al momento de darles capacidad económica para vivir dignamente.

Pero además es necesario que por muy urgente que sea esta prioridad, que por muy declaratoria de emergencia que desde 1995 tiene el sector eléctrico nacional, es necesario que se siga el debido proceso establecido en las leyes vigentes, guste o no a los Gobiernos de turno y empresarios aliados a los mismos. Sin el respeto al debido proceso, esta prioridad será solo una forma solapada de que nuevos actos de corrupción se produzcan que pongan en riesgo alcanzar la plena soberanía para los habitantes de este país, entorpeciendo la ejecución de las obras y la calidad de las mismas.

Coca-Codo-Sinclair sobrepasa en largo lo que hasta el momento se ha hecho en obra pública del país desde que es una República. Aunque parezca exagerado, este proyecto es casi un equivalente en su tiempo de la construcción del ferrocarril trasandino. Estamos hablando de una inversión de USD 1.600 millones para generar 1.500 megavatios, mucho más de lo que produce la central de Paute y que no puede ser tratado por ningún Gobierno como un negocio de oportunidad.

No solamente que es una mega inversión local sino que a nivel de la región sudamericana es el más importante proyecto en gestión. Coca-Codo-Sinclair es un proyecto de larga data; sus primeros estudios se iniciaron en la década del setenta del siglo pasado, que inicialmente estaba concebido para generar 869 megavatios. Por lo tanto, es necesario que exista una transparencia en su gestión.

Alianza sí, negociado no

La alianza entre Termopichincha, de propiedad del Fondo de Solidaridad, con la empresa pública argentina ENARSA avalada por la firma del Convenio de Alianza Estratégica firmada por los gobiernos de Ecuador y Argentina a través del Ministerio de Electricidad y de Planificación Federal de Argentina, debe ser conocida en toda su extensión, así como las razones que motivaron la decisión del CONELEC de otorgar la concesión del proyecto a la generadora nacional, por cuando, dentro del Plan Maestro de Electrificación 2007- 2016 (realizado en este Gobierno), dicho proyecto no constaba dentro del Plan de Expansión de Generación.

Tantas son las interrogantes que genera la designación de Enarsa como socio estratégico de Pichincha, que el solo anuncio de este hecho al igual que el descubrimiento de reservas de 5' millones de metros cúbicos de petróleo en Venezuela (proyecto conjunto con PDVSA), ha motivado que un sector de la Cámara de Diputados del Congreso argentino, gestione la aprobación de un proyecto de resolución, para que el gobierno de Cristina Kichner conteste un cuestionario de once, de las cuales, las últimas cuatro son por el tema Coca-Codo-Sinclair.

¿Qué tan sólida es Enarsa?

La inquietud es cuáles serán las inversiones por parte de Enarsa a este proyecto y cuáles serán las fuentes de financiamiento. Y esta se debe a que desde su creación por Ley en el 2004, la gestión financiera de Enarsa no ha sido tan exitosa que se diga. Según el estatuto de la empresa, un 53% pertenece al Estado nacional, un 12% a las provincias y el 35% se ofertará en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero esto no ha sido posible.

Al respecto, el medio electrónico edición en su edición del 8 de febrero donde ya se daba cuenta de que Enarsa y tres empresas argentinas construirán la central Coca-Codo-Sinclair, escribía: **“Hasta ahora la empresa estatal de energía Enarsa no consiguió destacarse, con excepción de su vinculación en el Valijagate (escándalo por encontrarse en la valija de un empresario venezolano USD 800.000 que venía a bordo de un avión de Enarsa y que se sospecha era para financiar la campaña de la actual presidenta de Argentina). Pero la empresa parece haber lanzado una campaña de marketing para rectificar esa imagen de inoperancia y corrupción. Su titular, Ezequiel Omar Espinoza, quiere presentar a Enarsa a los empresarios locales como un vehículo para realizar negocios regionales en el ámbito boliviano. Eduardo Eurnekián (Corporación América) se manifestó interesado pero la apuesta es hartó riesgosa”**.

Los actores privados

Primera inquietud: ¿será Coca-Codo Sinclair el ancla que estaba esperando ENARSA para poder obtener el dinero en la Bolsa de Buenos Aires para financiar su expansión y apagar las sospechas de corrupción? Pasemos a los actores:

- Comencemos por el más conocido por los ecuatorianos y por el propio presidente Rafael Correa. Esta empresa de propiedad de Eduardo Eurnekian tiene la concesión del servicio de aeropuerto José Joaquín de Olmedo ubicado en Guayaquil. Recordemos que en los primeros días de la administración Correa, el Presidente señaló que en ese contrato de concesión, las cosas no estaban claras y dudaba de la legalidad de la misma. Adicionalmente a ello, se anuncia la participación de EKRON CONSTRUCCIONES, la misma empresa que fue contratada para la construcción del nuevo terminal aeroportuario de Guayaquil, que anuncia la construcción de un centro comercial en un sector exclusivo de Quito y que consiguió por parte del Consejo Nacional de Zonas Francas, ser declarada en el 2006, usuaria de la zona franca del Terminal Aeroportuario de Guayaquil.
- El Grupo Cartellone que tiene su pilar principal en la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A. con 88 años de experiencia en Argentina, en la construcción de diques, centrales eléctricas puentes y que en los últimos años diversificó sus inversiones en las áreas de alimentos, viñedos aceros, energía eléctrica y gas. Tiene participación en Energía San Juan, que tiene la concesión de la distribución eléctrica en esa provincia argentina así como en las empresas eléctricas que brindan igual servicio en Tucumán y Jujuy.
- EL grupo Pescarmona que es un importante holding metalúrgico representado por su bandera insignia IMPSA. También tiene participación en viñedos. Tiene proyectos en generación de energía y hace algunos años se informó que tenía una reserva de USD 380 millones para proyectos de energía alternativa.

¿Qué tienen en común estas tres empresas? Primero que son argentinas. Segundo: tienen presencias en instituciones privadas como Fundación Invertir y en foros como el Coloquio IDEA, que cada año tiene una reunión donde los principales grupos económicos argentinos se reúnen para discutir la economía y proponer su agenda al gobierno de turno. Tercero: están muy ligadas al grupo Kichner. Se comenta que Enrique Pescarmona es un fervoroso partidario de los Kichner y que ellos intercedieron en la ampliación regional de IMPSA.

¿Cómo? Tiene firmado con CVG EDELCA de Venezuela, el contrato para el diseño, fabricación, transporte y montaje del equipamiento electromecánico para la central hidroeléctrica Tocota, en proceso de construcción sobre el río Caroní, en el estado venezolano de Bolívar; tiene un contrato para modernizar e incrementar la potencia de la central hidroeléctrica Acaray II en el departamento paraguayo del Alto Paraná.

Además Pescarmona y el Grupo Cartellones ejecutan juntas obras civiles como fue la ampliación y finalización de la carretera Baños-Puyo y la construcción de un puente sobre el río Pastaza.

En medios argentinos se comenta que ENARSA pondrá en esta obra el management para el proceso COM (Construcción, operación y mantenimiento) mientras las otras tres, sin necesitan de licitaciones, de valoraciones y de comparación de precios construirán la central, en un

asunto ya decidido por los gobiernos de Argentina y Ecuador. El único que pondrá el dinero contante y sonante será el Estado ecuatoriano a través de Termopichincha (de propiedad del Fondo de Solidaridad), que aún no dice bajo qué considerandos escogió a una compañía con una pobre reputación en cuanto a éxitos empresariales.

La participación de ENARSA cumple una de las máximas del justicialismo peronista: “hacer negocios sin dinero, con plata de cualquiera”.

Creo que más que nunca es importante que la letra pequeña de los acuerdos en la construcción de este proyecto que por decisión del presidente Correa lo harán las cuatro empresas amigas argentinas, sea cuidadosamente revisado. Los amigos venezolanos aún no aceptan la letra pequeña que los argentinos quieren poner en el acuerdo de exploración y producción petrolera. Cuidado nos quedamos con un megaproyecto vital para Ecuador en enredos financieros y judiciales.

Por lo tanto, concluyo que es importante para el Gobierno que ha tomado decisiones políticas acertadas en materia de incrementar la energía eléctrica, debe dar no sólo la apariencia de honestidad, sino que debe dar paso a una veeduría ciudadana para asegurar el éxito del proyecto, ya que al no existir nadie quien fiscalice y una Asamblea de plenos poderes sin poder fiscalizar al Presidente Correa, la veeduría Ciudadana (de la cual muchos asambleístas de Acuerdo País en sus épocas de oposición exigían por quítame una paja) nos asegurarán la transparencia de los actos y la seguridad para todos, incluidas las cuatro empresas amigas argentinas.